

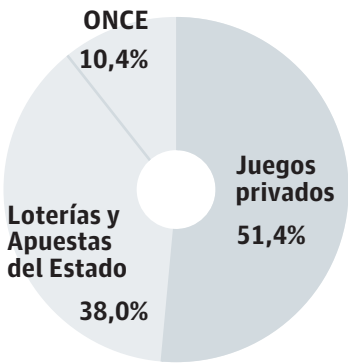
Notan la crisis... pero menos

Gasto real en todos los juegos

Datos en millones de euros
Fuente: Ministerio de Interior

	2006	2007	2008	2009	2010	VARIACIÓN 2006-2010
Juegos privados	4.692,96	5.078,13	5.390,99	4.852,67	4.752,64	+1,27%
Casinos	552,68	556,82	498,78	428,71	387,82	-29,83%
Bingos	1.405,64	1.364,61	1.267,57	1.082,94	987,64	-29,74%
Tragaperras	2.734,65	3.156,69	3.624,64	3.341,02	3.377,18	+23,50%
L. y Apuestas del E.	3.520,73	3.636,39	3.674,89	3.616,33	3.518,00	-0,08%
Juegos pasivos	1.635,76	1.922,33	1.693,64	1.627,64	1.597,08	-2,36%
Juegos activos	1.884,98	1.714,06	1.981,25	1.988,69	1.920,92	+1,91%
ONCE	1.114,20	1.125,96	1.092,30	1.030,02	968,84	-13,05%
TOTAL	9.327,89	9.840,48	10.158,18	9.499,01	9.239,49	-0,95%

Por tipo



Por CC AA

Euros anuales/hab.

Madrid	237
Valencia	226
C. y León	222
La Rioja	221
Aragón	217
Canarias	213
Murcia	211
Baleares	209
Asturias	199
Euskadi	197
Cataluña	191
Cantabria	187
Extremadura	184
C.-La Mancha	168
Andalucía	164
Navarra	149
Galicia	133

Por un puñado de dólares

Madrid y Barcelona pugnan por un macrocomplejo del juego, que promete ingresos multimillonarios e impone condiciones leoninas a la Administración

BRUNO PÉREZ

Hagan juego. La bola gira desde hace semanas en una partida de ruleta que se lleva a cabo, cómo no, en Las Vegas. Solo participan dos jugadores y lo singular es que será el crupier, y no el azar, el que determine quién gana..., si es que lo consigue alguno de ellos. Lo último que hemos podido saber de esta partida es que una delegación del Gobierno autonómico madrileño ultima en la propia capital mundial del juego los detalles de una reunión que se celebrará en cuestión de pocas horas, y que se antoja decisiva para conocer dónde se construirá el mayor complejo de ocio imaginado nunca para Europa. La rival es Barcelona, cuyas opciones –cimentadas en el favoritismo inicial de los promotores del proyecto, su mayor proximidad al corazón de Europa y el intenso tráfico de turistas de cruce que genera su puerto marítimo– fueron defendidas el sábado en Las Vegas una delegación de la Generalitat catalana.

Lo que justifica semejante despliegue político y diplomático es Eurovegas, el megalomano proyecto del multimillonario propietario de casinos norteamericano Sheldon Adelson para crear una ciudad del juego en Europa. El complejo se asentará sobre una superficie equivalente a 1.000 campos de fútbol, donde se levantarán 12 hoteles de lujo, tres campos de golf, decenas de restaurantes, nueve teatros, una sede permanente del Cirque du Soleil y seis casinos, que albergarían 1.000 mesas de juego y 18.000

máquinas recreativas.

Con todo, lo que más interesa a Madrid y Cataluña es la promesa de Adelson de invertir 17.000 millones de euros y crear 260.000 puestos de trabajo, de los cuales 164.000 estarían directamente vinculados a Eurovegas, todo un caramelo en tiempos de crisis. Como resalta David Pérez, alcalde de la localidad madrileña de Alcorcón, cuando se ponen esas cifras encima de la mesa «cualquier Gobierno está obligado a ponderar un proyecto así».

Pero el tiene otra cara; una serie de exigencias muy difíciles de cumplir. Según distintas fuentes, el magnate estaría planteando una auténtica enmienda a la totalidad al ordenamiento jurídico español, con peticiones que obligarían a cambiar decenas de leyes estatales, autonómicas y locales e, incluso, alguna directiva europea. Sus pretensiones van desde permitir fumar en el interior de sus casinos y habilitar el acceso a menores a relajar la legislación sobre blanqueo de capitales, solicitando una exención casi total de sus obligaciones fiscales y laborales, así como una dotación de infraestructuras que obligaría a canalizar toda la inversión pública del futuro destino del complejo a garantizar las comunicaciones de éste.

La relación de exigencias es de tal calibre que en opinión de muchos juristas inhabilitaría la viabilidad del proyecto. Para Miguel García Rescalvo, socio director de Consultores de Gestión Pública, es bastante dudoso que «se



El magnate Sheldon Adelson quiere construir una Eurovegas en España. :: REUTERS

pueda configurar un estado de excepción tan potente sin afectar a derechos constitucionales». Javier Gálvez, socio de Garrido-Falla y Gálvez Abogados, entiende, asimismo, que las modificaciones legales planteadas «supondrían una transformación del marco legal sin precedentes en España» y coincide con García Rescalvo en que algunas de las modificaciones solicitadas, particularmente las referentes al marco laboral, «crearían situaciones de excepción que podrían vulnerar la Constitución».

Sin límites aparentes

Pero la política es un terreno abonado al posibilismo y rara vez entiende de límites. «Este proceso no se puede plantear en términos de líneas rojas, si acaso es una línea verde de esperanza para miles de personas que hoy no tienen un em-

pleo», argumenta el alcalde de Alcorcón, David Pérez, que, junto a la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, figuran en la primera línea de los dispuestos a flexibilizar la ley lo que sea necesario para dar acomodo al proyecto. La flexibilidad también ofrecida por la Generalitat está condicionada por su resistencia modificar las normas urbanísticas para adaptarlas al complejo ideado por Adelson. Son el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno central los que han manifestado más reticencias. Desde el consistorio madrileño se ha dejado sentado que su voluntad de atraer inversión, capital y empleo no supondrá «crear una isla fiscal en Europa ni excepcional la aplicación de las leyes», mientras que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha aclarado que, si bien el Gobierno está dispuesto a revisar la

regulación para mejorar el atractivo y la competitividad de España como destino inversor, «no está dispuesto a conceder patentes de corso, ni a que las leyes fiscales, ni de ningún otro ámbito, alberguen algún tipo de discriminación».

Mientras en el debate político se dirime el grado de flexibilidad que se puede ofrecer, el debate social parece definitivamente escorado en contra de un proyecto que, según la plataforma 'Eurovegas, no', pretende retornar al modelo de macrodesarrollos y pelotazos urbanísticos que desencadenó el estallido de la crisis y ofrecer puestos de trabajo de bajo valor añadido a la generación de jóvenes mejor formada de la historia de España. Incluso los acercamientos al asunto de medios internacionales como la BBC o Associated Press ponen de

manifiesto la paradoja de que la misma España que sufrió el hundimiento del ladrillo intentente salir ahora de la crisis por ese mismo camino con un proyecto al que han bautizado como 'Sin City, ciudad del pecado'. Y es que no son pocos, dentro también del ámbito policial, los preocupados por que un proyecto de semejante magnitud convierta a España en un imán para actividades tan poco edificantes como la prostitución de lujo o el blanqueo de capitales.

Mientras, desde el sector del juego el proyecto se observa entre el escepticismo y la esperanza. En los últimos cinco años, la facturación del segmento de los casinos en España ha caído desde los 500 millones de euros de 2007 a los 290 millones con los que se cerró el ejercicio pasado, según los datos de la Asociación Española de Empresarios de Casinos, como consecuencia de la crisis económica y la dura y, en muchos casos, desleal competencia de los establecimientos 'on-line'.

La irrupción de Eurovegas ha servido para que consultoras como PricewaterhouseCoopers hayan variado exponencialmente sus perspectivas sobre el futuro del mercado del juego en España y prevean ahora un extraordinario repunte de la actividad que, según sus proyecciones, podría llegar a duplicar su facturación de aquí a 2015. Desde la patronal de casinos estas proyecciones se consideran «optimistas» a día de hoy, aunque se admite que, de concretarse, el proyecto revitalizaría el sector y prestigiaría el segmento de los casinos en un momento complicado por la competencia 'on-line'. No es descartable que, por el camino, consigan también mejorar un marco fiscal que aplica un tipo del 55% sobre el dinero que se mueve en sus mesas, que llevan años intentando flexibilizar sin éxito ante las autoridades y que ahora está más cerca que nunca de ser modificado gracias a un multimillonario de Massachuset.